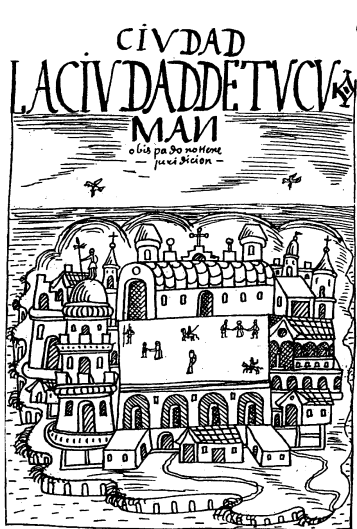


Integración en Ideas

Una publicación del IDELA/UNT



LA POLÍTICA EXTERIOR DE BRASIL

1990-2004

Luiz Alberto Moniz Bandeira

El autor: cientista político brasileño, antiguo profesor de la Universidad de Brasilia, autor, entre otras, de las siguientes obras: “O expansionismo brasileiro e a formação dos Estados na Bacia do Prata” y “Conflicto e integração na América do Sul. Brasil, Argentina e Estados Unidos (Da Tríplice Aliança ao Mercosul)”

El trabajo: trabajo publicado en “La Onda Digital”, revista electrónica uruguaya de reflexión y análisis, número 238 (mayo de 2005) y 239 (junio 2005). Traducción para La Onda Digital de Cristina Iriarte.

Junio de 2005

Parte I

LA POLÍTICA EXTERIOR DE BRASIL

1990-2004

Luego de un período de crecientes dificultades entre Brasil y Estados Unidos, en el curso de las décadas de 1970 y 1980, Fernando Collor de Melo (1990-1992), el primer presidente de la República electo por el voto directo desde 1960, prometió que su visita a Washington, en 1991, marcaría el fin de una “fase amadorística (sic) y romántica” en las relaciones de los países.

Se empeñó en vaciar el contencioso, que había, e inició la desregulación y liberalización de la economía, haciendo diversas concesiones a los Estados Unidos, cediendo y concediendo, sin exigir reciprocidad. Su sucesor, Itamar Franco (1992-1995), con una inclinación nacionalista, moderó el discurso y la práctica liberalizadora del gobierno de Collor de Mello, al mismo tiempo que trató de contener la inflación y estabilizar la moneda, mediante la ejecución del Plan Real.

Fernando Henrique Cardozo, su sucesor, asumió la presidencia de la República en 1995, con la pretensión de revitalizar la agenda Brasil-Estados Unidos, “sin las incomprensiones del pasado”. Reconoció las divergencias que existían como “propias de los relaciones caracterizados por la amplitud de intereses recíprocos” y, a través del diálogo, procuró sobreponer al contencioso bilateral cotidiano una agenda más abrangente, incluyendo la “creciente democratización de las relaciones internacionales”. A lo largo de sus dos mandatos (1995-1999 y 1999-2003), procuró ajustar los objetivos de Brasil a los intereses de los Estados Unidos, o sea, al nuevo orden internacional unipolar, para facilitarle la inserción, armoniosamente, en el proceso de globalización económica y permitirle la obtención de un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La adhesión al TNP, al Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR), y a otros tratados asimétricos y discriminatorios, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), que consagraban la predominancia de los Estados Unidos y de las potencias ricas y nucleares, constituyeron aspectos marcantes de tal esfuerzo.

Mientras tanto, la adopción de políticas económicas neoliberales, como consecuencia de la renegociación de la deuda externa y de las condicionantes establecidas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, tales como reducción del Estado, a través de la privatización, desregulación y reforma institucional, así como el mantenimiento de un régimen de tasas fijas o semi-fijas de cambio, en general, sobrevaluado, aumentaron enormemente la vulnerabilidad externa de Brasil, sobretodo a partir de 1999.

La privatización, o mejor, la extranjerización de las empresas estatales, de los sectores de telefonía y energía eléctrica y otros, con la entrega de su control a los capitales extranjeros, fue uno de los aspectos más perversos de las políticas neoliberales, pues, al no contribuir en nada para aumentar los ingresos por concepto de exportación, estas empresas, desnacionalizadas, pasaron a presionar la balanza de pagos, agravando el desequilibrio, con la transferencia de ganancias para sus matrices en el exterior. El déficit en la balanza de servicios saltó de u\$s 15,3 billones en 1990, cuando el proceso inflacionario se intensificara en Brasil, para u\$s 28,8 billones, en 1998, y el déficit en las transacciones corrientes saltó de u\$s 3,7 billones a u\$s 33,6 billones, en el mismo período. Con un déficit comercial acumulado, entre 1995 y 1999, del orden de u\$s 24,9 billones, luego de años consecutivos de saldo positivo, el Brasil se enfrentó con la necesidad de tener que captar, anualmente, cerca de u\$s 40 billones a u\$s 50 billones, en el mercado internacional, para atender los compromisos con el pago de intereses y transferencia de lucros, fletes y royalties, así como amortizar los préstamos y cerrar las cuentas externas.

No obstante el fuerte apoyo dado al Brasil, directamente, por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cuando sucedió la crisis financiera de 1999, el proyecto del ALCA, tal como era pretendido por Washington, continuó como el nervio más sensible de las divergencias entre Brasil y los Estados Unidos, en la medida en que los objetivos económicos, políticos y estratégicos de los dos países se contradecían, encubiertas por el conflicto de intereses comerciales. El propósito del ALCA consistía en reavivar la Doctrina Monroe, en su dimensión económica y comercial, y permitir a Estados Unidos no sólo restablecer su hegemonía sobre América Latina, sino enfrentar la Unión Europea, embrión del futuro Estado europeo (meta del Tratado de Maastricht) del cual Alemania, que ya incorporaba a su espacio económico a Rusia y los demás países del extinto Bloque Socialista, constituía el epicentro.

Fernando Henrique Cardoso, después de la aprobación Trade Promotion Authority (TPA), por la Cámara de Representantes, a fines de 2001, afirmó que, “si las condicionantes fuesen tomadas al pie de la letra, esto significa que no habrá ALCA”. Y agregó, enfáticamente, que “el ALCA será aceptado o no dependiendo de nuestro interés. Debe ser un toma y daca”.

Fernando Henrique Cardoso mantuvo un buen relación directo con Bill Clinton, pero las divergencias con los Estados Unidos se explicitaron en varias otras cuestiones de política exterior, con respecto, sobre todo, a América del Sur, y a la posible intervención armada en Colombia, bajo el pretexto de combatir la narcoguerrilla, así denominada porque los negocios de la droga se convirtieron en la más importante fuente de financiamiento de la insurgencia política. Brasil prohibió la utilización de su territorio para cualquier operación militar en Colombia, por cuanto contrariaba los principios de no intervención y autodeterminación, que pautaban tradicionalmente su política exterior. Y continuó no aceptando que, bajo el pretexto estratégico militar o de combate al narcotráfico, los Estados Unidos extendiesen sus instalaciones militares a la Amazonía brasileña, cuya defensa siempre preocupó a las Fuerzas Armadas brasileñas, que pasaron a implementar la “estrategia de resistencia”, como hipótesis de guerra contra una potencia tecnológicamente superior.

A partir de la ascensión de George W. Bush a la presidencia de los Estados Unidos, la política exterior de Brasil se presentó verdaderamente contradictoria. El canciller Celso Lafer dimitió al embajador Samuel Pinheiro Guimaraes de la directoría del IPRI, porque criticaba el ALCA y, después, aceptó que los Estados Unidos destituyesen ilegalmente al embajador José Mauricio Bustani de la dirección de la OPAC. Estas iniciativas y actitudes serviles de Celso Lafer, que se constituyó como el peor canciller en la historia de Itamaraty, no fueron consistentes con los incisivos y altivos pronunciamientos de Fernando Henrique Cardoso, que tal vez para enfriar la repercusión altamente negativa que tuvo la dimisión del embajador Samuel Pinheiro Guimaraes, volvió a manifestarse, de manera más categórica sobre el ALCA. En un discurso en la III Cúpula de las Américas, en Québec (22 de abril), declaró que el ALCA sería “bienvenido” si su creación fuese un paso para dar acceso a los mercados más dinámicos; si efectivamente fuese un camino para reglas compartidas sobre anti-dumping; si redujese las barreras no-tarifarias; si evitase la distorsión proteccionista de las buenas reglas sanitarias; si, al proteger la propiedad intelectual, promoviese, al mismo tiempo, la capacidad tecnológica de pueblos; y si fuese más allá de la Ronda Uruguay,

corrigiendo las asimetrías entonces cristalizadas, sobre todo en el área agrícola. “No siendo así, sería irrelevante o, en la peor de las hipótesis, indeseable” – concluyó.

Luego de los atentados terroristas que destruyeron las torres gemelas del WTC y de parte del Pentágono, con más de 3.000 muertos, Fernando Henrique Cardoso, en la misma mañana del 11 de setiembre, telefonó a Bush, a fin de brindarle solidaridad total, y Celso Lafer tomó la iniciativa de convocar una reunión del Órgano de Consulta de la OEA, invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río de Janeiro, alegando que “la excepcional gravedad de los ataques y la discusión de sus desdoblamientos” justificaban el recurso al mecanismo de seguridad colectiva del hemisferio. Tres días después, declaró que Brasil podría participar de la guerra, llegado el caso, apoyando una acción militar de los Estados Unidos, desde que el grupo terrorista que atacó las torres del World Trade Center y el Pentágono fuese identificado. Y, durante la XXIV Reunión de Consulta de los Cancilleres Americanos, el 21 de setiembre, afirmó que “las más de cinco décadas transcurridas desde la firma del TIAR no le quitan la validez”.

Su propósito declarado fue crear un “molde jurídico de cooperación, compatible con las resoluciones de la ONU”, con la “ventaja” de excluir a Brasil del compromiso de empleo de la fuerza armada en el tratamiento del terrorismo, delimitando jurídicamente la manifestación política de solidaridad. Esta fue la explicación que también ofreció a Fernando Enrique Cardoso. Sin embargo, la invocación del TIAR, cuyo Art. 3 indicaba que “un ataque armado por parte de cualquier Estado a un Estado americano será considerado un ataque contra todos los Estados americanos”, fue evidentemente disparatada. El ataque contra el World Trade Center y el Pentágono no partira de ningún otro Estado nacional, como en Peral Harbor (1941). Mientras pudiese ser considerada una acción bélica, no prevista en la normativa internacional de guerra, partió de un enemigo difuso, disperso, que recurrió al terrorismo, aún a costa del suicidio, porque no disponía de misiles y otras armas para atacar Estados Unidos.

La convocatoria del Órgano de Consulta de la OEA, agravada por la declaración de que el TIAR, instrumento de la Guerra Fría, no perdería la validez, constituyó, por lo tanto, una tontería, sobre todo después que el presidente de México, Vicente Fox, en reunión del Consejo Permanente de la OEA, anunciara el propósito de denunciarlo, diciendo que él representaba no sólo un “caso grave de obsolescencia e inutilidad”, como lo demostrara la guerra de las Malvinas (1982) , “sino que ha impedido, en contra de sus propósitos, la

generación de una idea de seguridad adecuada a los alcances y necesidades del hemisferio”. Según explicara Fox, con mucha lucidez, la nueva arquitectura del sistema internacional, ponía en evidencia que este instrumento se tornaría “inservible, puesto que surgió de causas y realidades que han desaparecido”, y la vulnerabilidad de las naciones, en el nuevo sistema globalizado, ya no derivaba, primordialmente, de consideraciones militares, razón por la cual los instrumentos diseñados en el pasado y concebidos para otras condiciones fueron superados por los hechos. Era, por lo tanto, “indispensable reconocer el anacronismo del Tratado de Río, el cual surgió como una emergencia y de acuerdo a las condiciones de la época”.

Las actitudes de Celso Lafer compitieron, fuertemente, para consolidar la percepción de que la política exterior de Fernando Henrique Cardoso, así como la política económica, de manera general, constituyó un simple accesorio de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, en el mundo y, en especial, en América Latina. Y contribuyeron en desgastar aún más el prestigio del gobierno, al proyectar la imagen de obsecuencia a los designios de los Estados Unidos, en medio de una gestión turbulenta, como nunca hubo, la peor en la historia de Itamaraty. Y no se muestran consistentes con los pronunciamientos de Fernando Henrique Cardoso, contrarios a la política exterior de George W. Bush, quien se rehusaría a ratificar el Protocolo de Kyoto – sobre la reducción de emisión de gases-invernadero – bloquearía los esfuerzos internacionales para fortalecer la Biological Weapons Convention, denunciaría el Tratado ABM (Anti-Balistic Missile Agreement), y retiraría la adhesión de los Estados Unidos al tratado que creó la Corte Penal Internacional contra los crímenes de guerra, instituida en La Haya por la ONU, además de intensificar las presiones sobre otros países para exceptuar los ciudadanos americanos de su jurisdicción.

Poco tiempo después de Lafer invocar el disparatado Tratado de Río de Janeiro, de cara a los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, Fernando Henrique Cardoso, en un discurso en la Asamblea Nacional de Francia, se refirió a Estados Unidos, al proclamar que “la barbarie no es solamente la cobardía del terrorismo, sino también la intolerancia o la imposición de políticas unilaterales a escala planetaria”. Y, durante la visita al presidente George W. Bush, en Washington, destacó, diplomáticamente, que había, “from time to time, some difference” entre Brasil y Estados Unidos, y, recordando que en la víspera “the President (Bush) said to be American first”, completó: “Well, I would say the same, to be Brazil first. That’s normal. But then let’s see how to cooperate”.

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cualquiera fuese su propósito de cooperar con los Estados Unidos, no podía dejar de atender y responder a los intereses concretos de Brasil – económicos, sociales y políticos – generados y modelados por el proceso productivo, que el Estado nacional, como instancia superior de organización y comando de la sociedad, debía articular y representar. Y el ALCA, en realidad, no convenía a Brasil, bajo varios aspectos. Un estudio divulgado el 2 de mayo de 2002 por la Secretaría de Rentas Federales demostró que los Estados Unidos, México y Canadá serían los países más beneficiados con la formación del ALCA, cuyo comercio estaría concentrado en empresas multinacionales, que siempre distorsionaran los precios, la mayoría de las veces, para transferir lucros o perjuicios de un país a otro.

La Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), por su parte, calculó que Brasil perdería u\$s 1 billón por año en su comercio exterior, a partir del 1º de enero de 2006, fecha prevista para la implantación del ALCA, puesto que sus importaciones sobrepasarían los u\$s 2.254 billones, mientras que las exportaciones solamente aumentarían cerca de u\$s 1.252 billones, lo que agravaría su vulnerabilidad, con un creciente déficit en sus cuentas externas. También la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) concluyó que el ALCA traía más amenazas que oportunidades para Brasil, llevándolo a perder el mercado, dentro del hemisferio, para 176 productos exportados por sus empresas, principalmente en los sectores de manufacturas, o sea, máquinas y equipamientos, automóviles, papel y celulosa y productos químicos, en virtud de la competencia de los Estados Unidos y Canadá. Y otro estudio, realizado por los investigadores de la Universidad de Campinas, a pedido del Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, embajador Sergio Amaral, llegó a la misma conclusión de que la implantación del ALCA, por un lado, va a incrementar las importaciones de Brasil y, por otro, va a inhibir sus exportaciones para los países de América Latina, además de alejar las inversiones extranjeras, promover la “desindustrialización y desnacionalización” de la economía, ocasionando el aumento de desempleo y de la demanda por dólares, luego de analizar 18 cadenas productivas – los sectores que producen el 53,1% de la facturación industrial nacional, el 57% de las exportaciones y el 68,4% de las importaciones totales del país. Brasil tendería a regresar a la condición de país agro-exportador y productor de manufacturas livianas o bienes de consumo, una vez que el área de libre comercio provocase la destrucción de buena parte de su parque industrial, particularmente en los sectores más sofisticados, en que los Estados Unidos, sin duda, predominaban. No sin razón, Fernando Henrique Cardoso reconoció que era más fácil, “ideológica y políticamente”, negociar acuerdos comerciales con la Unión

Europea que con los Estados Unidos, para la formación del ALCA, pues presentaban menos riesgos para la soberanía de Brasil.

La política exterior de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), a la presidencia de la República, declaró, durante la campaña electoral, que el ALCA no constituía una propuesta de integración, “sino una política de anexación, y nuestro país no será anexado”. Como candidato, Lula da Silva podía decir, libremente, lo que pensaba. Como jefe de gobierno, entretanto, tenía que preservar la relación de Brasil con los Estados Unidos. Así, más por conveniencia política que por intereses comerciales propiamente dichos, no alejó a Brasil de las negociaciones para la formación del ALCA. Y la nominación de los embajadores Celso Amorim y Samuel Pinheiro Guimarães, que Celso Lafer dimitiera del IPRI debido a sus pronunciamientos contra el ALCA, para los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y secretario general de Itamaraty, respectivamente, demostró que Brasil buscaría con los Estados Unidos una “sociedad madura, con base en el mutuo interés”, como Lula da Silva declaró en su discurso de asunción, y no fundada en la sumisión y servilismo.

Esta directriz produjo cierto enfriamiento en las relaciones entre los dos países, luego de la inauguración de su gobierno, el 1º de enero de 2003. Algunas tensiones surgieron por causa de la huelga general en Venezuela, promovida por la oposición, con el discreto beneplácito de Washington, tendiendo al derrocamiento del presidente Hugo Chávez, cuyo gobierno constitucional Brasil había respaldado, desde, además, los últimos días del mandato de Fernando Henrique Cardoso. Lula da Silva también criticó la guerra contra Irak, fue deflagrada por los Estados Unidos para atender, entre diversos factores, los intereses de las industrias bélicas y compañías petrolíferas americanas. “El presidente Bush (...) le falta el respeto a la ONU, no tiene en cuenta al Consejo de Seguridad y lo que piensa el resto del mundo. Creo que esto es grave. Grave para el futuro de la ONU, que es una referencia de comportamiento para las naciones del mundo entero” – dijo Lula da Silva.

Tales críticas no impidieron que él, al visitar Washington, el 20 de junio de 2003, declarase creer que las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos podrían “sorprender al mundo”. A pesar de que existían diferencias de posiciones y de percepciones, y de profundas divergencias también en el área comercial, difíciles de resolver, un buen reracionamiento

entre Brasil y los Estados Unidos convenía tanto a Lula da Silva como a George W. Bush. Y los dos presidentes se empeñaron en evitar que estas divergencias en las negociaciones comerciales, tanto en la OMC como en el ALCA, contaminasen el resto de las relaciones bilaterales. Con todo, de la misma forma que Collor de Melo y Fernando Henrique Cardoso, que buscaron establecer un buen relacionamiento entre los dos países, Lula da Silva no consiguió evitar las divergencias y fricciones, mientras mantuviese la política de estabilización económica y financiera, de acuerdo con el FMI, a fin de evitar la fuga de capitales y el retorno de la inflación. La contienda, sobre todo en torno del ALCA/MERCOSUR, recrudeció, agravada por otros litigios, en la medida en que los intereses nacionales de Brasil pasaron a prevalecer como vector de su política exterior, en contradicción con las pretensiones imperiales de Estados Unidos, exacerbadas en la administración de George W. Bush. Y las negociaciones entre Brasil y los Estados Unidos llegaron a un impasse.

El proyecto del ALCA iba mucho más allá del llamado libre comercio, en sentido estricto. Incluía aspectos normativos para servicios, inversiones, compras gubernamentales y propiedad intelectual que incidían directamente sobre la capacidad reguladora de los países. En otro sentido, Estados Unidos no se disponían a ofrecer libre acceso a su mercado, el mayor del hemisferio, para los productos en que Brasil presentaba ventajas comparativas (sobre todo, pero no sólo agrícolas), y excluían de las negociaciones aspectos de importancia prioritaria, como los subsidios agrícolas y las medidas anti-dumping. Además del azúcar, la commodity más protegida en Estados Unidos, dos de los productos brasileños más competitivos – acero y jugo de naranja – sufrían restricciones tarifarias y no-tarifarias, que tendían a proteger a los fabricantes americanos e impedían el aumento de las exportaciones de Brasil. Y los Estados Unidos señalaron que no eliminarían los subsidios para estos productos hasta que el tema no fuera resuelto, en el ámbito de la OMC, con los países de la Unión Europea. Esto significaba como consecuencia del acuerdo entre Francia y Alemania, que, no habría ninguna alteración en su política agrícola hasta 2007 y que aquellos productos brasileños tampoco tendrían acceso preferencial al mercado americano, a través del ALCA. Los Estados Unidos igualmente se rehusaban a tratar la ley anti-dumping, que permitía al gobierno de Washington aplicar medidas de salvaguarda a productos que ellos considerasen que estaban siendo importados a precios sub-valorados. La cláusula en este sentido constaba de las provisiones del NAFTA y Brasil no la aceptaba, en el ALCA, pues constituía una de las barreras no-arancelarias, levantadas frecuentemente por los Estados Unidos para proteger sus industrias eficientes.

El gobierno de Lula da Silva también se opuso a acuerdos que solamente resultarían en perjuicio para Brasil y no aceptó una reducción de aranceles, que tuviese como base el porcentaje aplicado, menor que el consolidado en la OMC, como hiciera el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. “En vez de prendernos a concepciones irrealistas de un ALCA, en torno de las cuales el consenso se plantea inalcanzable, preferimos concentrarnos en el ‘ALCA posible’, que concilie de la manera más productiva los objetivos necesariamente diferenciados de los 34 países participantes” – escribió Celso Amorim, aclarando que fue “a partir de este enfoque consistente y realista” que la declaración conjunta en la reunión de los presidentes Lula da Silva y George W. Bush, en Washington, expresó el entendimiento de que los dos países cooperarían para que las negociaciones fuesen concluidas, con éxito, en los plazos previamente acordados, los cuales, mientras tanto, no podían prevalecer sobre el contenido. Según Celso Amorim, el gobierno del presidente Lula da Silva no habría de adherir a acuerdos que fuesen incompatibles con los intereses brasileños, aunque tratase de explotar, soberanamente, todas las alternativas para la promoción del comercio y la aceleración del desarrollo nacional.

Esta resistencia a aceptar un acuerdo incompatible con sus intereses nacionales, llevó a Brasil y los Estados Unidos a un conflicto, de profunda repercusión, en las negociaciones, durante la 5ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), realizada en Cancún (México), el 14 de setiembre de 2003. Brasil coordinó la formación de un bloque llamado G-21, liderando, dentro de la OMC, a los países emergentes, como India, China, México, África del Sur e Indonesia, que no estaban dispuestos a proseguir con la agenda, que sólo interesaba a las potencias industriales, después de ya haber reducido tarifas de bienes manufacturados y adoptado reglas sobre patentes, sin que nada les fuese concedido en cuanto a la liberalización del comercio agrícola. Así, los delegados de 146 países no alcanzaron en Cancún ningún entendimiento con relación a los dos principales temas de la agenda, establecidos en las reuniones de Singapur (1996) y Doha (2001). Estados Unidos y la Unión Europea pretendieron obtener un acuerdo, sosteniendo inversiones, competencia, compras gubernamentales y facilitación de los cambios a las reglas del comercio internacional, pero no quisieron discutir los subsidios que concedían, anualmente, a los productos agrícolas y perjudicaban las exportaciones de los países en desarrollo.

“La diplomacia brasileña fue la gran vencedora de Cancún al impedir que el comercio agrícola prosiguiese dando cobertura a los intereses de la Unión Europea y de los Estados

Unidos, por efecto de maniobras diplomáticas de los países que detentan el mayor poder mundial” – comentó el profesor Amado Cervo, concluyendo que “el ministro Celso Amorim erigió una obra de genio de la ingeniería política”, al coordinar la formación del G-21 (o G-más, como él prefirió llamar), el grupo de países en desarrollo, reuniendo a China, India, África del Sur, Argentina, México, Chile, prácticamente toda América Latina, Tailandia, Filipinas, Paquistán, Egipto y otros. Estos países, que representaban más del 55% de la población mundial, casi el 69% de la producción agrícola y la mayoría de los pobres de todos los continentes, no aceptaron más la diferencia de tratamiento que se estableció cuando el GATT, a comienzos de la década del 50 del siglo XX, aprobó un “waiver”, o sea, una excepción para la agricultura, a pedido de los Estados Unidos, y poco tiempo después juzgó como productos agrícolas o agrobusiness, o sea, productos agroindustriales, tales como aceite y harina de soja, harina de trigo, aceite de oliva, etc., permitiendo que los Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y otras potencias industriales pudiesen concederles, anualmente, subsidios, en valores de más de u\$s 300 billones, y exportarlos fuera de las normas de mercado. Según información del Banco Mundial, el gobierno americano destinaba, anualmente, u\$s 3 billones a las subvenciones para el plantío de algodón en los Estados Unidos. Y cerca de ¼ de los grandes empresarios rurales, en los Estados Unidos y en la Unión Europea, lograron, durante la década del 90 del siglo XX, subsidios, que les posibilitaron producir mucho más cosechas de las necesarias para el consumo doméstico y vender el excedente, en el mercado mundial, a precios más bajos de lo que los países en desarrollo de Asia, África y América Latina.

El impasse en la reunión de la OMC representó una derrota para la Unión Europea y, especialmente, un fiasco para los Estados Unidos, evidenciando las enormes dificultades que tendrían para avanzar en las negociaciones sobre el ALCA. El gobierno de George W. Bush intensificó entonces las presiones sobre los países sudamericanos, como Colombia, para que se apartasen de la posición de Brasil y del MERCOSUR, con vistas a la reunión sobre el ALCA, en Miami. Este comportamiento, fue criticado con dureza por parte del canciller Celso Amorim, diciendo que era una “cosa muy lamentable, muy destructiva”, puesto que los Estados Unidos no iban a convencer a los países, que integraron el G-plus, liderado por Brasil, “sino haciendo amenazas”. El embajador Adhemar Bahadrian, encargado de las negociaciones de Itamaraty, previó, por su parte, que el ALCA podría no salir del papel. De hecho, la turbulencia continuó agitando las negociaciones. El confrontación entre Brasil y Estados Unidos, explicitado en Cancún, tornaría inevitable el colapso de la reunión de la Comisión de Negociación Comercial (CNC), a instancia técnica de las negociaciones sobre el

ALCA, que se reunió entre el 1º y 3 de octubre, en Port of Spain, capital de Trinidad & Tobago. Luego de intensas conversaciones, debido a la resistencia de Uruguay, Brasil, con apoyo de Argentina y de los países del MERCOSUR, presentó una propuesta conjunta, a ser debatida en la reunión de ministros, marcada para noviembre, en Miami.

Esta propuesta colocó las negociaciones en “tres carriles”, previendo el derrumbe de barreras comerciales para otros países en desarrollo en un plazo menor que el que fijase Canadá y Estados Unidos y dejando los temas sensibles, como normas de protección de inversiones y a la propiedad intelectual, así como la apertura de compras gubernamentales y servicios a los proveedores extranjeros, para ser negociados, separadamente, por los países que quisiesen. Lo que acarrió el fracaso de la reunión fue, entonces, el mismo impasse que había ocurrido en Cancún.

Mientras tanto, por más que los gobiernos de Lula da Silva y George W. Bush se esforzaran para que los conflictos en el área comercial no repercutiesen sobre las relaciones bilaterales, las tensiones recrudecieron. El gobierno americano, en enero de 2004, instituyó el “US-VISIT” (United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology), el programa que establecía el control total del ingreso de visitantes, por medio de fotografías y sistemas computarizados de reconocimiento de cara y digitales, en los 115 puertos marítimos y aeropuertos de los Estados Unidos, de todos los extranjeros, oriundos de países que necesiten de visa para entrar en los Estados Unidos.

La medida, ejecutada por Homeland Security Secretary, alcanzó a los visitantes de todos los países, inclusive Brasil, exceptuando, sin embargo, apenas 27, la mayoría europeos. Como consecuencia, del juez de la 1ª Jurisdicción Federal de Mato Grosso, Julier Sebastião da Silva, de Mato Grosso, acogió la Acción Cautelar Innominada, instigada por el procurador de la República, José Pedro Taques, concediendo una preliminar, y determinó que la Policía Federal impusiese a los turistas americanos el mismo tratamiento a que serían sometidos los brasileños que viajaran a los Estados Unidos.

En su decisión, al recoger el argumento del procurador José Pedro Taques de que, “si ellos (los americanos) pueden suponer que todo extranjero es terrorista, nosotros también estamos autorizados a hacer lo mismo”, el juez Julier Sebastián da Silva, observando que, de acuerdo con la nueva determinación del gobierno americano, “personas de varias nacionalidades, consideradas desde luego terroristas en potencial”, deberían ser fotografiadas y tendrían sus

impresiones digitales recogidas por las autoridades norteamericanas siempre que entrasen o dejasen los Estados Unidos, destacó que, obviamente, los ciudadanos europeos y de otros países ricos no serían objeto del “acto ultrajante”, el cual estaría reservado a los nacionales de países pobres de América Latina, África, Oriente Medio y Asia. Mientras tanto, una vez que en el derecho público internacional, observa el llamado principio de reciprocidad, de modo que las relaciones entre Estados no se realizasen de forma desigual, principalmente tratándose de la dignidad de la persona humana y de protección y resguardo de los derechos humanos, el juez Julier Sebastián da Silva difirió el pedido de concesión de medida preliminar y determinó a la Unión Federal, que hiciese gestiones junto a las autoridades norteamericanas en el sentido de que los brasileños fuesen excluidos de la exigencia que pasaría a entrar en vigor a partir del día 1º de enero de 2004 para entrada y salida de los Estados Unidos de América. Mientras perdurase la restricción impuesta por las autoridades norteamericanas, la Policía Federal debía recoger las impresiones digitales de los nacionales de los Estados Unidos, en los puertos, aeropuertos y carreteras, cuando entrasen en territorio brasileño, “bajo pena de serles negada la entrada debida”.

La medida, determinada por el juez federal Juvelier Sebastião da Silva, afectó, naturalmente, las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos, al generar más de un foco de tensiones. La Embajada Americana, en Brasilia, emitió una nota, en la cual decía comprender el derecho soberano que Brasil tenía para determinar cuales son los requisitos de entrada en el país, pero lamentaba la forma por la cual los nuevos procedimientos fueron iniciados, repentinamente, discriminando ciudadanos de los Estados Unidos, con tratamiento excepcional que resultó en largos atrasos en el procesamiento, cuando algunos ciudadanos norteamericanos tuvieron que esperar más de nueve horas en su llegada al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro.

El fracaso de los Estados Unidos en la tentativa de imponer sus intereses, tanto en Cancún como en Port of Spain, indicó, claramente, que el ALCA, de acuerdo a lo proyectado en 1994, se frustraría. Y, de hecho, se frustró. A fin de evitar el impasse y otro fiasco, en la 8ª Reunión Ministerial, realizada en Miami, los Estados Unidos hicieron concesiones y aceptaron un acuerdo, en torno del formato del ALC, propuesto por Brasil (ALCA light y a la carte), y diseñado una semana antes, en reunión previa, entre Robert B. Zoellick y Celso Amorim. Ni los Estados Unidos insistieron en los items rechazados por Brasil, tales como compras gubernamentales, servicios, etc., ni Brasil exigiría, como contrapartida, que fuese discutida la cuestión de los subsidios agrícolas y ley anti-dumping, que los Estados Unidos no querían. El

acuerdo resultó de concesiones, con base en una concepción más flexible del ALCA, el ALCA Light, dividida en tres etapas, tal como Brasil pretendiera, restringida a los temas sobre los cuales había consenso y a un conjunto mínimo de obligaciones comunes, reglas básicas, en las 11 áreas en negociación, pero permitiendo que cada país hiciese acuerdos por separado, en las áreas que les conviniese. Este entendimiento solamente se dio cuando el gobierno de los Estados Unidos, que percibía al canciller Celso Amorim como enemigo ideológico del ALCA, constató que la campaña contra Itamaraty, con el apoyo del lobby y de algunos órganos de prensa dentro de Brasil, no alcanzaría ningún resultado y que el fiasco de Cancún se podría reproducir en la 8ª Reunión Ministerial, en Miami, Florida, estado gobernado por Jeb, hermano de George W. Bush.

El gobierno de Lula no pretendería confrontar con los Estados Unidos. Apenas trató de conducir las negociaciones sobre el ALCA de conformidad con los intereses de Brasil. Indagado por los repórters Eurípides Alcántara y Vilma Gryzinski, de la revista *Veja*, sobre lo que Brasil aceptaría perder en el ALCA, el canciller Celso Amorim, rápidamente respondió:

“No aceptamos perder la dignidad. No vamos a aceptar modelos que vienen prontos, todo tiene que ser negociado. Lo que sucedía antes era una falsa negociación. Las cosas se iban dando y, como máximo, eran postergadas. La principal barrera, los subsidios, los Estados Unidos no los discutían”.

Explicó que los temas de naturaleza normativa y sistémica tenían que ser discutidos en la OMC, pues no tenía sentido establecer una regla de propiedad intelectual para los Estados Unidos y otra para la Unión Europea. Este principio era también válido para normas de inversión y servicios. Y, en el tema de compras gubernamentales, el interés de Brasil consistía, sobre todo, en preservar su capacidad de seguir con una política de desarrollo, como en el caso de Petrobrás, que priorizaba las industrias brasileñas en la adquisición de equipamientos para las plataformas de petróleo, lo que no podría hacer más, si este sector fuese abierto a las competencias de las corporaciones americanas. Las industrias brasileñas de máquinas y equipos, principal factor de autotransformación y autosustento del capitalismo, serían, posiblemente, destruidas por las grandes corporaciones americanas, llevando a millares de trabajadores al desempleo.

Al mismo tiempo en que resistía las fuertes presiones para que aceptase dichos items en el ALCA, Brasil señaló una vez más la autonomía con que implementaba su política exterior. El 26 de setiembre de 2003, Lula da Silva visitó La Habana, donde firmó con Fidel Castro 12 instrumentos de cooperación en materia financiera, turismo, salud, agricultura, pesca, medio ambiente, educación e industria siderúrgica, y acuerdos comerciales, en el monto de u\$s 200 millones, una parte con financiamiento aprobado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), otra con recursos privados de empresas brasileñas, tales como el Grupo Brasilinvest y la constructora Casa Forma (u\$s 112 millones), para la construcción de cuatro resorts en Cuba.

Entre el 2 y el 9 de diciembre, acompañado por el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, Eduardo Duhalde, visitó cinco países árabes – Emiratos Árabes Unidos (EAU), Siria, Líbano, Egipto y Libia. Y, mostrando una vez más el intento de solidificar la integración con Argentina, en el MERCOSUR, visitó la India, el 26 de enero de 2004, acompañado por Eduardo Duhalde. La estrategia de política exterior del gobierno de Lula da Silva consistió, así, en construir, primordialmente, vínculos estrechos de cooperación política y económica entre Brasil y Argentina, tendiendo a forjar, a mediano plazo, un polo de poder, en América del Sur, y buscar, al mismo tiempo, establecer una alianza, tanto económica y comercial como política, con la India y África del Sur, líderes de los países en vías de desarrollo, que articularon el G-21 para obstaculizar que las potencias industriales, Estados Unidos y la Unión Europea, impusiesen sus intereses, durante las negociaciones de la OMC, realizadas en Cancún. Este bloque de países en desarrollo debería también abarcar también a China y a Rusia, países con los cuales Brasil también pretendía profundizar las relaciones comerciales y políticas, a fin de conquistar nuevos y diversificar sus exportaciones. No se trataba de hostilizar o enfrentar a los Estados Unidos, sino de cambiar la “geografía de la negociación comercial”, como dijo el canciller Celso Amorim, y negociar de forma equilibrada, defendiendo los intereses de Brasil.

La contienda entre Brasil y los Estados Unidos devino, no de una posición ideológica del gobierno de Lula da Silva, sino de la contradicción entre los intereses reales de los dos países. Por motivos de política doméstica, los Estados Unidos no aceptaban disminuir el subsidio de los productos que exportaban para Brasil, y no daban compensaciones en acceso a mercados para productos agrícolas del MERCOSUR. Y su interés en la formación del ALCA no consistía en la reducción de las barreras arancelarias, sino en forzar básicamente la apertura de sectores estratégicos, como las compras gubernamentales y servicios, de modo que

podrían continuar obteniendo superávits en sus transacciones con los países del MERCOSUR. Estos términos, a fin de evitar que se repitiese en la reunión en la reunión de Miami el fiasco de Cancún, fueron transferidos para una posterior discusión en la OMC y se estableció un acuerdo en torno del ALCA Light, de acuerdo a lo que propusiera Brasil. Entretanto, en la reunión de Puebla (México), que se realizó entre el 3 y el 6 de febrero para proseguir con las negociaciones, los Estados Unidos, rompiendo el acuerdo de Miami y liderando un grupo de 14 países, entre los cuales Canadá, México, Chile y los de América Central y Caribe (G-14), volvieron a insistir en un ALCA “abrangente”, con los items relativos a compras gubernamentales, inversiones, servicios y propiedad intelectual, sin que aceptasen eliminar los subsidios y subsidios indirectos a las exportaciones agrícolas – créditos y seguros – así como no propusieron nada para otros temas que el MERCOSUR consideraba importante: créditos, seguros y ayuda interna.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Martín Redrado, advirtió que el éxito o el fracaso de la reunión de Puebla dependía de la voluntad de negociación de los Estados Unidos, una vez que el MERCOSUR ya había cedido bastante, los Estados Unidos no habían “movido una sola coma en su posición agrícola”. Y, “sin agricultura no hay acuerdo” – dijeron Martín Redrado y el co-presidente de las negociaciones, el embajador brasileño Adhemar Bahadian, cuando mediaban las deliberaciones. Esta era una condición inamovible. Tal como el canciller Celso Amorim advirtiera que, si los Estados Unidos quisiesen forzar demás, nada irían a conseguir, ni con Brasil ni con otros países de América del Sur. En efecto, la reunión de Puebla terminó en un fiasco, como la de Cancún, y las negociaciones sobre el ALCA llegaron a un impasse, difícil de superar hasta 2005, plazo para su clausura, establecido en 1994.

Las tensiones en las relaciones de Brasilia con Washington no se restringieron, sin embargo, a las negociaciones sobre el ALCA o a la imposición a los turistas americanos del mismo tratamiento a que serían sometidos los brasileños en viaje a los Estados Unidos, con la vigencia del “US-VISIT” (United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology), el programa de identificación de los visitantes, por medio de fotografías y sistemas computarizados de reconocimiento de cara y huellas digitales, establecido por el gobierno George W. Bush. La medida determinada por el juez federal Juvelier Sebastián da Silva causó enorme impacto político y contó con el apoyo del 99% de la opinión pública brasileña. Y, a través de la Portería Interministerial 10/01, firmada por los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, Márcio Thomaz Bastos y Celso Amorim, respectivamente, y por el abogado

general de la Unión, Álvaro Augusto Ribeiro Costa, el gobierno mantuvo la identificación de los americanos, en todos los puertos marítimos, aeropuertos y carreteras. En seguida, Lula da Silva viajó para participar de la Cúpula Extraordinaria de las Américas, los días 12 y 13 de enero, en Monterrey (México), donde conversó con George W. Bush sobre la cuestión de la obligatoriedad de identificación (fotográfica y dactiloscópica) de brasileños y americanos, y le entregó un documento en que proponía la eliminación de la exigencia de visa para la entrada de brasileños en los Estados Unidos, lo que eliminaría idéntica exigencia para el ingreso de los americanos en Brasil. “Si estamos queriendo integración de las Américas es natural que no existan dificultades, sin facilidades para las personas” – comentó Celso Amorim. De hecho, la aplicación del programa “US-VISIT” evidenciaría la dubitación del gobierno americano, que instituye el área de libre comercio, permitiendo la libre circulación de bienes, capitales y servicios, pero, al mismo tiempo, discriminaba a Brasil y los países de América Latina.

En la misma época, se configuró otra área de conflicto con los Estados Unidos. Brasil iba a convertirse en el séptimo país que produciría uranio enriquecido, a escala industrial, con capacidad para proveer el 60% de las necesidades de sus usinas nucleares, y exportar hasta u\$s 12,5 millones al año, a partir de 2014, de acuerdo a lo anunciado por el presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), Oldair Dias Gonçalves, en octubre de 2003. Y en diciembre de 2003, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), estimulada por el Departamento de Estado, comenzó a presionarlo para que firmase un acuerdo de salvaguarda, que cubriese las instalaciones de la empresa estatal Industrias Nucleares de Brasil (INB), en Resende, Estado de Río de Janeiro. A comienzos del primer semestre de 2004, los Estados Unidos intensificaron las presiones para que Brasil adhiriese a un específico Protocolo Adicional al acuerdo de salvaguardas del TNP, dando a los inspectores de la AIEA mayor autoridad para hacer verificaciones intrusivas en su programa nuclear.

Este Protocolo Adicional, que estaba en negociación desde 1992, sería voluntario, pero la AIEA pretendió hacerlo impositivo e ir más allá de la práctica regular, que permitía la verificación de todos los aspectos del enriquecimiento de uranio, salvo su tecnología. Exigía también que Brasil suspendiese todos los programas de enriquecimiento o de reprocesamiento, que ya hubiese comenzado, y permitiese tantas inspecciones como fuesen arbitradas, no sólo en las instalaciones nucleares, sino en cualquier parte del territorio considerada sospechosa – o que incluía residencias particulares, si así se resolviera, respondiendo a cualquier pregunta relacionada con la cuestión.

De conformidad con la doctrina de George W. Bush, anunciada el 11 de febrero de 2004, los países que hasta entonces no producían uranio enriquecido no estarían autorizados a hacerlo. Sólo Brasil, mientras tanto, estaría afectado y perjudicado con la adhesión al Protocolo Adicional, por cuanto era, entre los signatarios del TNP, el único país, con una industria nuclear capaz de producir uranio enriquecido.

Este problema evidenció aún más el enorme error cometido por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, llevando a Brasil a aceptar el TNP, al cual la India, Paquistán e Israel no adhirieron y las grandes potencias, nítidamente los Estados Unidos, iban a violar, no cumpliendo el programa de desarme y produciendo nuevas armas nucleares. Entre tanto, la resistencia de Brasil ante las inspecciones intrusivas pretendidas por la AIEA dio origen a intrigas, a través de algunos medios de comunicación, difundiendo la sospecha de que él estaría pretendiendo también fabricar armamentos nucleares. The Washington Post publicó un artículo, en el cual consideró que la actitud de Brasil, al no permitir que los inspectores de la AIEA examinasen las instalaciones nucleares en Resende, generaba recelo de que:

“a new type of nuclear race is underway, marked not by the bold pursuit of atomic weapons but by the quiet and lawful development of sophisticated technology for nuclear energy production, which can be quickly converted into a weapons program”.

El articulista, Peter Slevin, señaló que el proyecto de Brasil creaba también un dilema para el presidente George W. Bush, que pasaría a exigir restricciones más rigurosas sobre el enriquecimiento de uranio, aún para la producción de energía eléctrica, como parte de la nueva estrategia de impedir la proliferación de armas nucleares. Por su parte, La Nación, de Buenos Aires, comentó, en editorial que la “inesperada noticia” de que Brasil no autorizaría los inspectores de la AIEA a inspeccionar la usina de enriquecimiento de Uranio, había generado “comprensible inquietud”. Y al señalar la existencia de “temores en relación con las costosas centrífugas brasileñas”, inclusive, según algunos círculos, el peligro de que estas centrífugas pudiesen tener alguna conexión “con la actividad del doctor Abdul Qadeer Khan, a quien se imputa el haber vendido ilegalmente secretos científicos a Irán, Libia y – acaso – a Corea del Norte”, formuló varias preguntas, en las cuales se evidenció el intento de generar desconfianza y sospecha.

“¿Conoce la Argentina el programa al que no tendrá acceso la Agencia Internacional de Energía Atómica? ¿Tienen las autoridades argentinas información suficiente sobre las centrífugas brasileñas, con las salvaguardias de confidencialidad que son necesarias?”.

Por detrás de esta campaña contra la actitud del gobierno de Lula da Silva había, seguramente, tanto interés económico como, igualmente, político y militar-estratégico. Brasil, con la sexta mayor reserva mundial de uranio y tecnología propia, comercialmente competitiva, demostró que podía alcanzar la autonomía en la producción de combustible nuclear, fuente de energía de la mayor importancia, ante la perspectiva del agotamiento de las reservas mundiales de petróleo, aún en la primera mitad del siglo XXI, y no necesitaba más remitir el mineral en bruto para convertirse en gas en Canadá y, después, seguir para Europa, donde la Urenco lo enriquecía y lo devolvía en forma de gas para la utilización en las usinas de Angra I y Angra II dejaría de ser exportador de mineral y pasaría a desempeñar un importante papel como global player, en el billonario mercado de combustible nuclear, como virtual competidor de los Estados Unidos.

Parte II

LA POLÍTICA EXTERIOR DE BRASIL

1990-2004

El comando de la Marina, responsable por las ultra-centrífugas para enriquecimiento de uranio, y las agencias brasileñas del sector advirtieron al gobierno de que por detrás de las presiones de la AIEA, tras las que se movía el Departamento de Estado, podría existir el objetivo de espionaje de la tecnología de punta desarrollada por Brasil y considerada superior a la americana y a la francesa. Y el vice-almirante Othon L.P. da Silva, en la reserva, apuntó el motivo estratégico-militar que determinaba las presiones desencadenadas por los Estados Unidos. Aclaró que los artefactos bélicos nucleares podían ser clasificados de dos formas: los de destrucción masiva y los inhibidores de concentración de fuerzas. Armas de destrucción masiva eran las de fusión (bombas de hidrógeno) y las de fisión de mayor porte. Las de baja potencia eran inhibidoras, pues cualquier operación militar para invasión u ocupación de un territorio implicaba la previa concentración de fuerzas. La existencia de artefactos nucleares de baja potencia en el territorio-blanco, con un vector adecuado de lanzamiento, funcionaría como poderoso inhibidor, y obviamente no agradaban a los “países que tienen como opción política permanente la intervención militar – independientemente de la aprobación de la ONU”.

La existencia de una usina de enriquecimiento de uranio disminuye el tiempo entre la denuncia de todos los acuerdos y tratados ya celebrados, y la eventual fabricación de artefactos, ej.: making nuclear weapon on short notice. Según el vice-almirante Othon L. P. Da Silva, la intención del presidente George W. Bush de reiniciar pruebas nucleares y desarrollar nueva generación de pequeños artefactos con el objetivo de usarlos de forma “quirúrgica”, hasta incluso contra países no nucleares, era preocupante para el mundo. Y tales actitudes, sumadas a agresiones, sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, como sucedió en Irak, constituían un fuerte estímulo a la proliferación nuclear, principalmente en los países islámicos con los cuales había potencial de confrontación. Diversos motivos tenía, por lo tanto, Brasil para no permitir el tipo de inspecciones intrusivas que la AIEA iba a pretender. Y la perspectiva era de que la cuestión se reabriese en 2005, durante la conferencia del Examen del Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares, posibilitando que Brasil denunciase que las cinco potencias nucleares (Estados Unidos,

Rusia, Inglaterra, Francia y China) no iban a cumplir el “compromiso inequívoco” en cuanto a la eliminación total de sus arsenales atómicos.

Otros acontecimiento, mientras tanto, contribuyeron a complicar aún más las relaciones bilaterales entre Brasil y los Estados Unidos, par quien el problema principal lo constituía la política exterior. El canciller, embajador Celso Amorim obtuvo otra victoria con la decisión de la OMC, en la cuestión de los subsidios a los productores de algodón, que causaban pérdidas comerciales a Brasil del orden de los u\$s 480 millones. Durante una audiencia en la House of Representatives Agriculture Committee, el 28 de abril de 2004, el USTR Robert Zoellick declaró que iría a recurrir la decisión, pero diversos diputados reconocieron que Estados Unidos tendrían que desistir del ALCA, si el veredicto fuese mantenido, al final de la disputa. El diputado Robert Etheridge (Demócrata, Carolina del Sur) advirtió que, si la decisión prevaleciese, sería “una pérdida de tiempo” llevar el ALCA para la votación en el Congreso. Y, comentando la decisión a favor de Brasil, el diputado Bob Goodlatte, presidente del Committee on Agriculture, resaltó que ganar acceso para los productos agrícolas de los Estados Unidos era “the most important objective of the ongoing WTO negotiations”.

Poco tiempo después, el 9 de mayo, The New York Times publicó un largo artículo, firmado por el periodista Larry Rohter, en el cual atribuía al presidente Lula da Silva la costumbre de beber, resaltando, ya en el título, que esta costumbre se convertía en preocupación nacional. El artículo, muy vago y sin ningún fundamento serio, liviano e inflamante, afirmó que la “president’s predilection for strong drink” iba a afectar la performance de su gobierno. Y aún acentuó que históricamente los brasileños tenían razón de estar preocupados ante cualquier señal de “heavy drinking by their presidents”, pues Jânio Quadros, electo en 1960, era un notorio alcohólico y renunciaría al cargo, después de menos de un año de su investidura, dando origen a un período de inestabilidad política que “led to a coup in 1964 and 20 years of a harsh military dictatorship”. Este artículo provocó la indignación del gobierno y la repulsa de todos los líderes políticos, hasta de la oposición, así como de la propia prensa brasileña, y el propio presidente Lula da Silva determinó la cancelación de la visa de trabajo de Rohter, implicando su expulsión de Brasil, medida ésta que recibió varias críticas en los medios políticos, aunque contase con el apoyo de la gran mayoría de la población brasileña.

Como Dora Kramer, columnista política del Jornal do Brasil, observó, Rohter hizo “un relato con respecto a rumores que, ni por lejos, figuran en la lista de las principales preocupaciones nacionales con relación al gobierno de Lula”. Y exactamente por esto, debido a su falsedad, la

publicación del artículo en *The New York Times*, menos de dos semanas después de la victoria de Brasil en la OMC, en conjugación con el artículo del *Washington Post* sobre la producción de uranio enriquecido en las instalaciones de la INB, en Resende, y otros hechos, fortaleció la conjetura de que estaba en curso una campaña para desacreditar a Lula da Silva, mostrarlo como incompetente, y crear una situación de ingobernabilidad, de modo de permitir la adopción del parlamentarismo con un jefe de gobierno más paliativo para Washington. La comparación con Jânio Quadros, más allá del inconveniente, fue capciosa, al insinuar que Brasil podía caminar hacia una situación similar a la creada, con su renuncia a la presidencia de la República, el 25 de agosto de 1961. Todo indicó que los artículos publicados en *The Washington Post*, y por *The New York Times*, no fueron casuales ni eran inocentes. El ministro de Planeamiento, Guido Mantega, resaltó que cuando un diario, como *The New York Times*, pasaba a publicar este tipo de difamación, algo atrás había. “Si fuera un diario de la prensa amarilla, que viviera de esto, todo bien. Pero lo que vemos es que con el artículo trataron de desgastar la imagen del Presidente Lula”. En su opinión, este intento de desgaste era orquestado por intereses norteamericanos, en virtud de que Lula da Silva había alentado la formación del G-20 (grupo de 20 países en desarrollo), combatía los subsidios agrícolas concedidos por los Estados Unidos e iba a dificultar la creación del ALCA. Círculos militares y diplomáticos igualmente sospecharon de que la CIA iba a desarrollar una guerra psicológica (prensa), en el estilo de la grey y black propaganda, emprendida usualmente por la CIA, y su razón constituía la política exterior de Brasil, que contrariaba los intereses de los Estados Unidos.

Aunque mantuviese la política de estabilización monetaria, con más rigor aún que Fernando Henrique Cardoso, y promoviese dos reformas estructurales (previsional y tributaria), disgustando a los segmentos más radicales del PT y de la izquierda, pero ganando el respeto y la simpatía del empresariado y de los inversores extranjeros, la política exterior del gobierno de Lula da Silva, al defender, con firmeza, los intereses nacionales de Brasil, tanto en Cancún como en Port of Spain, entró en un camino de colisión con las directrices de la política exterior de George W. Bush. No fue sin razón, por lo tanto, que la revista americana *Newsweek*, en la semana de la reunión de Miami, circuló con el retrato de Lula da Silva en la tapa y el título: “The Two Faces of Lula: Wall Street Loves Him. Washington Loathes Him”.